

**T . S . J . CASTILLA-LEON CON/AD  
VALLADOLID**

AUTO: 00193/2021

**Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000554 /2021**

**Sobre:** ADMINISTRACION AUTONOMICA

**De:** JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE SANIDAD

**ABOGADO:** LETRADO DE LA COMUNIDAD  
MINISTERIO FISCAL

**AUTO Nº 193**

**ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:**

DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA

DOÑA ENCARNACIÓN LUCAS LUCAS

DON FELIPE FRESNEDA PLAZA

DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ

En Valladolid, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Con fecha 24 de mayo de 2021, a las 14:39 horas, ha tenido entrada en este Tribunal la solicitud formulada por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de autorización de la medida contenida en el Apartado segundo del Acuerdo 55/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta la medida especial de salud pública de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, antes de su publicación y eficacia, siendo incoado el PO 554/2021.

SEGUNDO.- Por Decreto de 25 de Mayo fue turnada la solicitud a la Sección Primera de este Tribunal, acordando dar traslado al Ministerio Fiscal, de manera inmediata, quien la ha informado en el sentido de oponerse a la ratificación de la medida interesada ya que *“(…) a la vista de los datos aportados, las medidas solicitadas se han establecido de manera muy superficial, como mera cautela y tratando a todo el territorio por igual, cuando las diferencias como hemos dicho anteriormente son sustanciales entre unas provincias y otras”*; considerando lo conveniente seguir observando la evolución y si la situación empeorara y

fuere necesario establecer alguna clase de medida restrictiva en todo o parte del territorio, que pudiera justificar la merma de algún derecho fundamental.

Recibido el informe pasan las actuaciones a la Ilma. Ponente Sra. Lucas Lucas, que expresa el parecer de la Sala, una vez que la misma ha deliberado sobre lo solicitado.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Comunidad Autónoma de Castilla y León, al amparo de lo previsto en el art. 10.8 de la LRJCA, introducido por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (publicada en el BOE de 30 de septiembre de 2020), solicita de este Tribunal la autorización de la medida contenida en el Apartado segundo del Acuerdo 55/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta la medida especial de salud pública de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, antes de su publicación y eficacia.

El Acuerdo 55/2021 tiene por objeto la limitación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, con carácter temporal (7 días), de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados limitándola a que no exceda de seis personas no convivientes.

En concreto se acuerda “1.- Durante el periodo comprendido entre la 01.00 y las 06.00 horas, la permanencia de grupos de personas en reuniones de carácter informal y no regladas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, así como en espacios de uso privado, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas no convivientes.

2.- No están incluidos en la limitación prevista en el punto anterior los siguientes supuestos y situaciones:

a) Las personas que viven solas, que podrán formar parte de una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada podrá integrar solamente una única persona que viva sola.

b) Las reuniones de personas menores de edad con sus progenitores, en el caso de que estos no convivan en el mismo domicilio.

c) Las reuniones de personas con vínculo matrimonial o de pareja cuando éstas vivan en domicilio diferente.

d) Las reuniones para el cuidado, atención, asistencia o acompañamiento de personas menores de edad, personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables.

e) *Las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable, en particular las previstas en el Anexo del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19, en la Comunidad de Castilla y León, respecto de las cuales se prevea la posibilidad de grupos de personas que no sean convivientes.*

f) *Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.”*

En apoyo de su petición el Letrado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León expone que la medida que ahora se somete a autorización ha sido dictada por una autoridad sanitaria, la Junta de Castilla y León, en el ejercicio de las competencias legalmente establecidas, por razones de urgencia o necesidad, es imprescindible para impedir la transmisión del virus al no haber otros medios más eficaces para lograrlo, se trata de evitar la agrupación de personas durante determinada franja horaria, en la cual, de ordinario, las reuniones se desarrollan en un ámbito en el que es frecuente la relajación de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, etc., de modo que se logre mantener la tendencia descendente en la propagación de la enfermedad, la medida será objeto de seguimiento y evaluación continua cada 7 días naturales, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad a fin de que pueda ser mantenida, modificada o levantada, y es una medida necesaria para la salud pública atendiendo a las circunstancias concurrentes, todas ellas relacionadas con la situación de emergencia producida por el nuevo coronavirus SARSCoV-2/COVID-29; afecta al derecho a la libertad (art. 17 C.E.), a la intimidad personal y familiar (art. 18 C.E.) y el derecho de reunión (art. 21 C.E.); son proporcionales para la finalidad que se persigue para proteger el derecho a la vida e integridad física, y proporcionadas atendiendo al espacio territorial al que afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de esa aplicación; además de resultar necesarias e idóneas para evitar la propagación de los contagios, pues no existe una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objetivo propuesto, y que el sacrificio de derecho y/o libertades reporta más beneficios al interés general que desventajas o perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y las circunstancias personales de quien la sufre.

Acompaña a la solicitud un informe-propuesta de la Consejería de Sanidad, de 19 de Mayo de 2021, en el que se contiene un análisis específico, con datos extraídos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) y de los sistemas de información asistencial de la Gerencia Regional de Salud (GRS), de la evolución de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 en Castilla y León en el que se justifica la medida acordada.

## SEGUNDO.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Sala para resolver la solicitud de autorización de la medida acordada por la Junta de Castilla y León, y el procedimiento a tramitar, resultan de los preceptos introducidos por la Ley 3/2020, de 18 de Septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia:

.- Art. 10.8 de la LJCA que dispone que las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia *“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”*.

En este supuesto al referirse la medida a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León los destinatarios de estas no están identificados individualmente.

.- Art. 122 quater LJCA establece que *“En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente Ley será parte el ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse en un plazo máximo de tres días naturales”* .

Se ha conferido traslado al Ministerio Fiscal que ha informado en el sentido expuesto en los antecedentes de esta resolución.

## TERCERO.- ÁMBITO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

Antes de continuar estimamos conveniente delimitar el ámbito de la cognición judicial a la hora de resolver sobre la ratificación judicial de las medidas acordadas por la Administración en condiciones de urgencia por ser necesarias para la salud pública.

Para hacer esta delimitación partimos de que la ratificación o autorización judicial solo es precisa cuando las medidas pueden implicar limitación o restricción de algún derecho fundamental, según la literalidad del artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio .

Ello supone, como ya hemos dicho en resoluciones anteriores, que la intervención judicial no alcanza a la declaración de conformidad a derecho de las mismas sino que nuestro pronunciamiento en este trámite se centra a su valoración como necesarias, justificadas y proporcionales en cuanto a las limitaciones que imponen para lograr el fin perseguido que no puede ser otro que la protección de la salud pública.

Desde esta perspectiva hemos considerado que los elementos a ponderar en un procedimiento como el presente han de ser:

.-Que las medidas preventivas hayan sido acordadas por una Autoridad Sanitaria que aparezca competente para ello;

.-Que se justifique la necesidad de las medidas acordadas;

.-Que exista proporcionalidad de las limitaciones que se imponen con el fin perseguido de protección de la Salud Pública.

Cualquier otro aspecto que pueda incidir en la legalidad de las medidas acordadas deberá hacerse valer a través del recurso contencioso-administrativo correspondiente.

Esta delimitación del ámbito de este tipo de procedimiento, que ha sido la mantenida por esta Sala en diversas resoluciones dictadas con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, ha sido corroborada por el TS en su reciente Sentencia de 24 de mayo de 2021, dictada en el recurso de casación nº 3375/2021.

En efecto, en dicha sentencia el TS al conocer a través del nuevo recurso de casación introducido por el art. 15 del RDL 8/2021, de 4 de mayo, del presentado contra el auto de 9 de mayo de 2021, dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias en un procedimiento de ratificación de medidas limitativas de derechos fundamentales por razones de salud pública adoptadas por el Gobierno Canario, declara, en cuanto a este tipo de procedimiento de ratificación de medidas sanitarias que la intervención judicial en ellos es sumamente concreta debiendo quedar limitada a la constatación preliminar de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa verificando la adecuación, necesidad y proporcionalidad de las medidas dispuestas, de modo que la ratificación que se acuerde en modo alguno condiciona el control de legalidad de las medidas que pueda efectuarse a través de un recurso contencioso-administrativo ordinario, concluyendo que este procedimiento de ratificación judicial, tal como está concebido, ni siquiera llega al punto de conocimiento que se alcanza en el incidente de medidas cautelares.

A continuación, el TS estima que el control judicial requerido a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia ha de comportar la comprobación de que la Administración que pide la ratificación: *“(i) es la competente para adoptar las medidas a ratificar; (ii) invoca los anteriores preceptos legales u otros que le confieran habilitación; (iii) ha identificado con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedad transmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida con*

*indicación de los hechos que así lo acreditan; (iv) ha establecido debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal; y (v) ha justificado que no dispone de otros medios menos agresivos para afrontarlo y que los propuestos son idóneos y proporcionados. Y, sobre esos presupuestos, (vi) la Sala correspondiente deberá concluir si dicha justificación es suficiente y si la limitación pretendida es efectivamente idónea, necesaria y proporcionada.*

#### CUARTO.- COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y HABILITACIÓN NORMATIVA PARA ACORDAR MEDIDAS QUE AFECTEN A DERECHOS FUNDAMENTALES.

Hemos expuesto más arriba que la medida que se acuerda por la Comunidad de Castilla y León es la consistente en que, en todo su territorio y durante 7 días, en el periodo comprendido entre la 01.00 y las 06.00 horas, la permanencia de grupos de personas en reuniones de carácter informal y no regladas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, así como en espacios de uso privado, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas no convivientes.

Como acabamos de ver, uno de los aspectos a revisar en nuestro juicio valorativo es el de la competencia del órgano autor del acto.

No hay dudas en este punto sobre la efectiva competencia de la Junta de Castilla y León para adoptar una medida de carácter sanitario. Así una vez finalizado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, modificado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, la Junta de Castilla y León ha aprobado el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19, en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la nueva Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y el Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.

El Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, establece en el apartado sexto que la persona titular de la Consejería de Sanidad, de oficio o a iniciativa de la Consejería competente por razón de la materia, podrá proponer a la Junta de Castilla y León, a la vista de la situación epidemiológica, la adopción de todas aquellas medidas adicionales o complementarias a las previstas en el Plan que se consideren necesarias, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública y las demás disposiciones sanitarias, al ser la Junta de Castilla y León una de las Autoridades Sanitarias previstas en el

art. 70 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.

Más dificultad ofrece, hasta el punto que ha dado lugar a diversas respuestas judiciales contradictorias, la cuestión relativa a si medidas limitativas de libertades y derechos fundamentales pueden acomodarse al soporte normativo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública o no quedaría más remedio que acudir para su adopción al denominado derecho de excepción, positivizado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 4/1981, de 1 de junio (de los estados de alarma, excepción y sitio).

Esta cuestión es también objeto de análisis por la citada anterior sentencia del TS en la que concluye que el marco normativo existente integrado, en lo que a la normativa estatal se refiere, por la Ley Orgánica 3/1986 y las Leyes ordinarias 14/1986 y 33/2011, permite a la Autoridad Sanitaria restringir, en determinadas circunstancias, los derechos fundamentales.

En dicha sentencia el TS tras transcribir el contenido de determinados preceptos de estas leyes expone que estos ofrecen suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales, las cuales, - añade- no pueden predeterminarse siempre ya que no han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas.

Y concluye el TS diciendo *“Sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica. No obstante, no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adolecen de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las Administraciones que los utilicen. Por el contrario, delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación. Y no es una novedad que los tribunales deban extraer del ordenamiento jurídico los criterios para resolver problemas que no han recibido una solución precisa por parte del legislador. Esto significa que será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos de estos preceptos, si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y proporcionalidad.*

*En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas, o sea, las que hemos destacado”.*

Por tanto la Comunidad Autónoma, como autoridad sanitaria cuenta con habilitación normativa para acordar medidas que pueden afectar al ejercicio de derechos fundamentales

pero no lo puede hacer de cualquier modo sino que debe de respetar los condicionantes previstos en la normativa anteriormente citada es decir, debe ser una medida adecuada a la finalidad perseguida, necesaria para lograr el fin propuesto y proporcional.

Concluyendo que el control judicial de estas medidas ha de comprobar los aspectos referidos en el fundamento anterior: competencia y habilitación de la Administración autora, identificación del peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedad transmisible, extensión de la medida, justificación de la inexistencia de medios alternativos menos gravosos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

#### QUINTA.- APLICACIÓN DE LA ANTERIOR DOCTRINA AL SUPUESTO PRESENTE

La medida acordada por la Administración en el Acuerdo 55/2021 tiene por objeto la limitación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, con carácter temporal (7 días), de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados condicionándolo a que no supere el número de seis personas no convivientes.

Es evidente que la medida acordada afecta al libre ejercicio de varios derechos fundamentales: derecho a la libertad personal (art. 17 CE), derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE) y derecho de reunión (art. 21 CE), y lo hace durante 7 días de modo indiscriminado para todo el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Nuestro análisis parte del hecho notorio de la existencia de un virus, Sars Cov2 que se transmite por contacto próximo con personas contagiadas y que su extensión y dimensiones ha determinado la declaración oficial de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020.

Pero la existencia de esta enfermedad y sus especiales características no es suficiente para la adopción de medidas como la interesada, siendo lo relevante la situación epidemiológica en el momento en el que se pretende adoptar ésta.

La Administración acompaña a la solicitud un informe-propuesta de la Consejera de Sanidad en el que se contiene un análisis específico de los datos extraídos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de los sistemas de información asistencial de la Gerencia Regional de Salud, en el que se analiza la situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma en los últimos catorce días indicando que la mejora apreciada en estas últimas semanas permite que la citada incidencia ya se sitúe dentro de la categoría de “riesgo medio”, al encontrarse por debajo del límite de 150 casos/1000.00 habitantes establecido en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19 aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud. A ello añade que la incidencia



acumulada en los últimos 7 días naturales supone el 47,4% de la incidencia de los últimos 14 días, por lo que también se encuentra en el “nivel medio” de IA7. Y se observa un ligero incremento en la incidencia del martes 18 de mayo con respecto al martes 11 de mayo que podría ser compatible con el periodo de incubación de nuevos casos contagiados tras el fin de algunas restricciones, situación que *“puede ser meramente puntual pero que requiere cautela”*.

En estos términos, y a la vista de la solicitud formulada, consideramos que la medida cuya autorización se solicita no está debidamente justificada ni resulta proporcional.

En primer lugar la medida se establece para su aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma cuya incidencia acumulada se encuentra en un nivel de riesgo medio y, a la vez, se expone que la situación epidemiológica en la Comunidad es muy diversa. En el informe que se acompaña se dice (Pg. 10) *“Existen importantes diferencias de incidencia entre algunas provincias de Castilla y León. Así, mientras la provincia de Burgos presenta una incidencia en 7 días (IA7) superior a 100casos/100.00 habitantes, la provincia de Soria presenta un IA7 inferior a 35casos/100.000 habitantes. Por lo tanto, existe una diferencia cercana al triple de incidencia entre los valores de la provincia de Burgos y Soria, que presentan respectivamente los valores máximo y mínimo”*, y lo mismo ocurre en la IA acumulada a 14 días.

No se justifica en modo alguno los motivos por los que existiendo estas notorias e importantes diferencias en cuanto a la incidencia de la enfermedad entre unas y otras provincias la medida se pretende generalizar a todas ellas sin distinción. Tampoco se justifica que el predominio de los casos en brotes de ámbito familiar, social y mixto -los cuales suponen, según el informe el 83,4% del total de brotes activos- sea igual en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Si bien este elevado porcentaje podría justificar la limitación o restricción de derechos pretendida no puede servir para ello desde el momento en que no se nos dice si este porcentaje es igual en todo el territorio de la comunidad y a la vez se expresa que los datos de incidencia acumulada resultan muy dispares entre unas y otras provincias.

En segundo lugar tampoco se justifica el ámbito temporal de la medida -7 días-. La delimitación temporal se fija en siete días igual que se podría haber fijado con otra duración. Este requisito no implica únicamente establecer un periodo de vigencia de la medida sino también exponer los motivos por los que con ese tiempo se puede lograr la finalidad perseguida. Nada se expone en la petición a este respecto pues en ella el tiempo de duración se indica únicamente a modo de cumplimiento formal del elemento temporal.

En tercer lugar, y como ya hemos adelantado, se apoya la medida en el predominio de casos en brotes de ámbito familiar, social y especialmente mixto (83,4 %) pero a la vez se

detalla que los indicadores sanitarios muestran una progresiva mejora de la situación epidemiológica que ha dado lugar a rebajar el Nivel de alerta al 3 en toda la Comunidad Autónoma desde el 21 de mayo y a la modulación de algunas otras medidas no restrictivas de derechos fundamentales, por lo que pretender ahora la implementación de éstas con carácter general en toda la Comunidad Autónoma supondría una suerte de relajación de medidas que no afectan a derechos fundamentales a costa de las que sí inciden en ellos. Desde la pérdida de vigencia de la declaración del estado de alarma realizada por RD 926/2020, de 25 de octubre, que tuvo lugar el 9 de mayo de 2021, no ha establecido la Comunidad Autónoma ninguna medida que afecte a derechos fundamentales de los ciudadanos de Castilla y León, por lo que, a falta de justificación, no se alcanza a comprender que en mejor situación epidemiológica se pretendan implementar medidas más restrictivas y que afectan a derechos fundamentales. Es posible que situaciones puntuales, concretas y determinadas requieran este tipo de intervenciones pero la general propuesta no se justifica convenientemente ni se compadece con la evolución epidemiológica descrita.

Por otro lado por la franja horaria establecida la medida se dirige especialmente al control o limitación del denominado “ocio nocturno” exponiendo en el acuerdo que en estas franjas horarias es donde se produce más encuentros de personas no convivientes y se relajan las medidas de prevención individual, a lo que se une el consumo de alimentos o bebidas alcohólicas que son actividades que no hacen posible el uso de la mascarilla y provocan cierta desinhibición, pero lo cierto es que estando prohibido, como esta, el consumo de alcohol en la vía pública, esta circunstancia no puede servir de justificación a la medida pretendida.

En cuarto lugar el informe acompañado a la solicitud expone que la limitación propuesta no tiene *“un impacto significativo en el derecho de reunión que obligue a escoger una medida alternativa con la que se consiga el mismo objetivo”*, afirmación que no compartimos. Que el “impacto” que una medida restrictiva de derechos fundamentales sea escaso o poco significativo es lo que -en su caso- puede justificar la adopción de dicha restricción al amparo de la normativa sanitaria anteriormente transcrita y una vez que el estado de alarma ha permitido su vigencia, pero ello no supone –como también hemos expuesto- que esa escasa incidencia sea suficiente para adoptarla; la medida –aunque tenga escasa incidencia en el ejercicio de un derecho fundamental- debe estar justificada, ser adecuada al fin perseguido, necesaria y proporcional. Y, en todo caso, la medida cuya autorización se pretende no solo afecta al derecho de reunión sino también al derecho a la libertad, y al derecho a la intimidad personal y familiar, por lo que la búsqueda de medidas alternativas menos intervencionistas es obligada.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación,

## PARTE DISPOSITIVA

### LA SALA ACUERDA :

1.- NO AUTORIZAR la medida contenida en el Apartado segundo del Acuerdo 55/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta la medida especial de salud pública de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, antes de su publicación y eficacia

2. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta resolución a la Administración de la Comunidad Autónoma y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los términos previstos en los art. 87.2 y 87 ter de la LJCA.

Así lo acuerdan y firman los lltmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala, de todo lo cual, yo el/la Letrado doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.